

Santiago, dieciocho de agosto de dos mil veinte.

**VISTOS:**

En estos autos Rol N° C-1013-2018 del 2° Juzgado Civil de Valdivia, procedimiento ordinario de indemnización de perjuicios, por sentencia de quince de mayo de dos mil diecinueve, se acogió parcialmente la demanda deducida por doña Angélica Gallegos Toledo y don Rodolfo Daniel Leveque Gallegos, en contra el Fisco de Chile y se le ordenó pagar a doña Angélica Gallegos Toledo la suma de \$80.000.000 (ochenta millones) y a don Rodolfo Daniel Leveque Gallegos, la suma de \$60.000.000 (sesenta millones), reajustadas según la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, entre la fecha en que la sentencia cause ejecutoria y el mes anterior al pago, devengando en igual periodo el interés máximo legal para operaciones de dinero reajustables.

Impugnada esa decisión por el Fisco de Chile, la mayoría de la Corte de Apelaciones de Valdivia, por sentencia de dieciocho de julio de dos mil diecinueve, (erróneamente datada como del año dos mil dieciséis) la revocó solo respecto de la demandante Angélica Gallegos Toledo, en cuanto rechazó la excepción de cosa juzgada opuesta por el Fisco de Chile, la que acogió, confirmándose en lo demás, el aludido fallo.

Contra esta última decisión, don José Miguel Salazar Isla, por los demandantes civiles, dedujo recurso de casación en el fondo, el cual se trajo en relación por resolución de veinticuatro de septiembre del año pasado, arbitrio que el recurrente en sus alegaciones ante esta Corte, limitó únicamente a la demandante Angélica Gallegos Toledo, desistiéndose en lo demás.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que por el recurso de casación en el fondo interpuesto por la



demandante civil doña Angélica Gallegos Toledo, se denunció que la sentencia de segunda instancia realizó una errónea aplicación del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, en relación al artículo 1700 y siguientes del Código Civil y los Tratados Internacionales sobre derechos humanos, a saber, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Ginebra, entre otros, así como, de los Principios de Derecho Internacional General y lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que consagran además de la imprescriptibilidad de los delitos calificados como de lesa humanidad, el derecho a la reparación integral, el cual importa reparar “*todo daño*” de quienes han sufrido esa clase de delitos.

Señaló que los sentenciadores, al acoger la excepción de cosa juzgada negaron los derechos de reparación, protección judicial y trato ecuánime, conforme lo dispone el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de los cuales es titular la demandante doña Angélica Gallegos Toledo, en su calidad de cónyuge de don Rodolfo Leveque Carrasco, quien fue víctima de un delito de lesa humanidad.

Agregó que, en su concepto, la aplicación de la excepción de cosa juzgada, no es concordante con la realidad actual en materia de Derechos Humanos, que no impide a la demandante ejercer en otro procedimiento su derecho a la reparación atendido el carácter de cosa juzgada formal de la sentencia de la sentencia dictada en los autos criminales rol N° 2182-98 instruidos por el Ministro don Jorge Zepeda Arancibia.

Terminó describiendo la influencia que este yerro habría tenido en lo dispositivo del fallo, solicitó acoger el recurso anulando la sentencia impugnada en la parte que se ha reclamado, dictando sentencia de reemplazo que acoja íntegramente la demanda impetrada.



**SEGUNDO:** Que los antecedentes del proceso que interesan al recurso en análisis, son los siguientes:

1° Que, en los autos Rol N° C-1013-2018 del 2° Juzgado Civil de Valdivia, sobre juicio ordinario de indemnización de perjuicios, la demandada Fisco de Chile, fue condenada a pagar a doña Angélica Gallegos Toledo, la suma de \$80.000.000 (ochenta millones) y a Rodolfo Daniel Leveque Gallegos, la suma de \$60.000.000 (sesenta millones), en su calidad de cónyuge e hijo de don Rodolfo Leveque Carrasco, quien fue víctima de un delito de lesa humanidad, sumas que deberán ser reajustadas según la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor entre la fecha en que la sentencia cause ejecutoria y el mes anterior al pago, devengando en igual periodo el interés máximo legal para operaciones de dinero reajustables.

2° Que dicha sentencia fue revocada por la Corte de Apelaciones de Valdivia con fecha 18 de julio de 2019, (erróneamente datada como del año 2016) solo en cuanto rechazó la excepción de cosa juzgada opuesta por el Fisco de Chile, respecto de la demandante doña Angélica Gallegos Toledo, la que en su lugar fue acogida, desestimándose a su respecto la demanda civil impetrada y confirmándose en lo demás.

3° Que, en los autos criminales Rol N° 2182-98, se interpuso en representación de la ya mencionada Angélica Gallegos Toledo, entre otros, una acción civil de indemnización de perjuicios por los daños materiales y morales sufridos por la desaparición de su cónyuge don Rodolfo Iván Leveque Carrasco, quien fue detenido por Carabineros de Chile, en la ciudad de Osorno el día 15 de septiembre de 1973, ignorándose su paradero hasta el día de hoy. Señaló que por sentencia de 11 de enero de 2007, confirmada con declaración en sentencia de reemplazo, esta Corte, el 7 de agosto de 2008 en causa Rol



N° 6574-2007, desechó la demanda al estimar que doña Angélica Gallegos Toledo estaba percibiendo una bonificación y pensiones mensuales de parte del Estado de Chile, siendo ésta la resolución cuyo mérito debe ser analizada para resolver si ha tenido lugar el pretendido efecto de cosa juzgada.

**TERCERO:** Que la sentencia impugnada acogió la excepción de cosa juzgada impetrada por el Fisco de Chile, desestimando la demanda de indemnización de perjuicios de doña Angélica Gallegos Toledo, al concluir que el hecho fundante de la acción de autos fue objeto de pronunciamiento judicial firme y ejecutoriado, en un proceso civil anterior, el que tenía el mismo objeto, fundamento e idéntica situación jurídica, que se pretende nuevamente someter a decisión judicial.

En el fundamento sexto los sentenciadores refiriéndose al primer requisito de la excepción de cosa juzgada, esto es a la identidad legal de personas, indicaron que consta que en estos autos se ha demandado al Fisco de Chile, por doña Angélica Gallegos Toledo; en tanto que en los autos criminales Rol 2182-98 se accionó civilmente en contra del Estado, por la misma persona, obrando en ambas ocasiones a título personal.

A continuación, en cuanto a la identidad de la cosa pedida, señalaron que “aparece acreditado en estos autos que en ambas causas se buscaba obtener la indemnización de los perjuicios por el daño moral sufrido por la señora Angélica Gallegos Toledo originados en el delito de lesa humanidad que afectó a su cónyuge don Rodolfo Iván Leveque Carrasco, cometido por agentes del Estado en el mes de septiembre del año 1973”.

Finalmente, respecto a la identidad de la causa de pedir, como tercer presupuesto de procedencia, expresaron que en ambas causas se afirma que la obligación indemnizatoria del Fisco emana de su responsabilidad extra



contractual, atendido que el hechor era miembro de Carabineros de Chile, y de la comisión, por parte de éste, de un delito de lesa humanidad, en el ejercicio y con ocasión de sus funciones públicas.

Por todo ello, los sentenciadores concluyeron que “en ambos juicios se trató del ejercicio de una acción de condena civil para que se tutele un derecho personal, por lo que la causa de pedir se configura con el ‘hecho constitutivo sobre el cual se pretende deducir la existencia de la relación jurídica a que se refiere la acción’ (Romero Seguel, Alejandro. La Cosa Juzgada en el Proceso Civil chileno. Editorial jurídica de Chile. 1° edición. 2002. Página 74)”. Precizando que en el caso de autos, el fallo precisó que los actos de secuestro y desaparecimiento y la relación de dependencia institucional que tenía el autor constituían la causa de pedir.

**CUARTO:** Que para resolver acerca del recurso en examen es del caso subrayar que sobre la excepción de cosa juzgada, acogida por la sentencia impugnada, la doctrina ha dicho: "Es aquel efecto que producen las sentencias definitivas o interlocutorias firmes o ejecutoriadas, en virtud de las cuales no se puede volver a discutir entre las partes aquella cuestión que ha sido objeto del juicio" (Fernando Orellana Torres, "Manual de Derecho Procesal. Tomo II. Procedimientos civiles ordinarios y especiales". Librotecnia. Reimpresión de la tercera edición actualizada, de mayo de 2010. Página 112). En el mismo sentido han opinado Mario Casarino Viterbo, "Manual de Derecho Procesal", Tomo IV, página 31; Darío Benavente, "Derecho Procesal Civil, Juicio Ordinario y Recursos Procesales", Quinta Edición, revisada por Juan Colombo, año 2004, página 23; Carlos Anabalón, "Tratado Práctico de Derecho Procesal Civil Chileno", Tomo III, páginas 148 y 149; Cristián Maturana Miquel, "Actuaciones Judiciales, Notificaciones, Resoluciones Judiciales y el Juicio Ordinario",



Facultad de Derecho Universidad de Chile, página 90, así como que "es la autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existen, contra ella otros medios de impugnación que permitan modificarla" (Eduardo Couture, citado en "Breves Nociones acerca de la Cosa Juzgada" de los profesores Mario Mosquera R. y Cristián Maturana M., Depto. Derecho Procesal, U. de Chile. Año 1991, páginas 5 y 6).

En el mismo sentido, Giuseppe Chiovenda la define como "la afirmación indiscutible y obligatoria para los jueces de todos los juicios futuros de una voluntad concreta de la ley, que reconoce o desconoce un bien de la vida a una de las partes" (Instituciones de Derecho Procesal Civil, Ed. Rev. de Derecho Privado, Madrid, pág. 409).

Por otra parte, esta Corte en fallos anteriores, ha señalado que "hay cosa juzgada cuando confrontando la acción deducida en ambos pleitos, su objeto y fundamento, resulta que es la misma situación jurídica que se pretende someter nuevamente a la decisión judicial, sin que desaparezca esta igualdad de situación por no ser unas mismas las expresiones con que el demandante sustenta su derecho, si sustancialmente tienen el mismo alcance". (R.D.J., T. 9, secc. 1ª, pág. 437)."

**QUINTO:** Que, en suma, sobre el particular debe concluirse que el instituto jurídico en referencia atañe a los efectos jurídico-procesales del litigio ya concluido en la nueva acción que ha sido propuesta; lo que importa una limitación al derecho que, por regla general tienen las partes para postular acciones de toda clase. Por consiguiente, su objetivo es impedir un nuevo pronunciamiento sobre materias en que ya ha recaído una decisión, reconociéndose un carácter inmutable a las decisiones jurisdiccionales, para lograr una efectiva seguridad jurídica que permitirá una completa certeza,



“impidiendo la renovación indefinida de pleitos entre las partes sobre el mismo asunto” (Corte Suprema Rol N° 1289-2005).

**SEXTO:** Que, al confrontar los dos procesos involucrados con el objeto de indagar sobre la concurrencia de la “triple identidad”, entre el fallo que sirve de sustento a la excepción y aquel en que ésta se opone, es incuestionable que en la especie se tramitó por todas sus fases un proceso previo, que terminó con la sentencia dictada en los autos criminales rol N° 2182-98, que desestimó la demanda civil intentada por doña Angélica Gallegos Toledo, por estimar que habría recibido y recibe una bonificación y pensiones mensuales de parte del Fisco de Chile, fallo que al inicio de la acción materia de este proceso se encontraba ejecutoriado.

Lo anterior importa cosa juzgada, pues entre uno y otro litigio hay identidad del litigante, de la cosa pedida y de la causa de pedir que, en la especie son los daños morales sufridos a consecuencia de las violaciones de derechos humanos cometidos por agentes del Estado y que padeció en su condición de cónyuge de don Rodolfo Leveque Carrasco. A este respecto es útil decir que la cosa juzgada objeto de estos razonamientos no es de carácter formal como se sostiene en el recurso, porque en la primera sentencia firme y ejecutoriada se entregó decisión relativa al fondo del asunto.

No obstante ello la demandante afirma en el recurso de casación en el fondo de estos antecedentes que no debió darse aplicación a dicha institución prevista en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil porque solo constituye la de carácter formal, y porque tratándose de crímenes de lesa humanidad predominan sobre la norma local las disposiciones de los Tratados Internacionales sobre derechos humanos, a saber, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Ginebra, entre otros, así como los



Principios de Derecho Internacional General y lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en lo referido al derecho a la reparación integral.

**SEPTIMO:** Que, en lo que respecta a la tesis del recurso, no puede menos que destacarse que éste no denuncia como inobservada por falta de aplicación alguna norma legal que establezca la obligación de indemnizar los perjuicios civiles demandados no obstante haberse dictado una sentencia previa con carácter de ejecutoriada que rechaza lo pedido. Ello tiene trascendencia porque la casación en el fondo es un medio de impugnación que opera a través de propuestas del recurrente como la ya señalada, esto es de ilegalidad por inobservancia de las normas jurídicas vinculantes.

**OCTAVO:** Que semejante omisión no es irrelevante, atendido lo dispuesto en los artículos 772 y 785 del Código de Procedimiento Civil, pues para que esta Corte pueda hacer lugar a la nulidad, es necesario que el recurso explique en todos sus extremos la forma en que se ha producido la infracción tanto en lo no aplicado cuanto en aquello que se hubiere lesionado por indebida aplicación.

**NOVENO:** Que, por su parte, el artículo 63.1 de la Convención preceptúa: “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”. En el punto 2, añade: “En caso de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte [refiriéndose a la Corte





Interamericana de Derechos Humanos], en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión”.

Que, en consecuencia, de lo reseñado queda en evidencia, que la citada Convención no dispone dejar sin efecto, anular o revocar sentencias judiciales firmes o ejecutoriadas de derecho interno, lo cual constituye precisamente la cuestión central de este asunto porque el recurso de casación en el fondo plantea la imposibilidad de cosa juzgada en estas circunstancias.

Así las cosas, el recurrente no llega a plantear la ilegalidad de la aplicación del contenido del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, esto es, de no volver a resolverse lo que ya está decidido, lo cual importa un criterio jurídico fundante de la legitimidad de la potestad jurisdiccional radicada exclusivamente en las judicaturas. Ello porque se trata de un poder otorgado que sólo puede ejercerse respecto de un asunto únicamente en una ocasión, para proporcionar certeza jurídica. Se trata de la única limitación que en este orden de ideas se establece a estos órganos, la que no es resultado sólo de un acto de voluntad sino, también de un proceso jurisdiccional llevado por todas sus etapas y grados, condiciones que impiden, como ocurre en la especie, avocarse, a resolver una vez más la misma acción.

En estas condiciones cuando en autos se desestima la acción haciéndose aplicación del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, esto es, por existir cosa juzgada, no se ha incurrido en ninguna infracción de ley que justifique la nulidad solicitada.

**DECIMO:** Que, en consecuencia, al decidir como lo hicieron los sentenciadores de la instancia no han incurrido en los errores de derecho



denunciados, por lo que el recurso de casación en el fondo intentado por don José Miguel Salazar Isla, en representación de la demandante civil, doña Angélica Gallegos Toledo, deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo preceptuado en los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, **SE RECHAZA** el recurso de casación en el fondo promovido por don José Miguel Salazar Isla, en representación de la demandante civil, doña Angélica Gallegos Toledo en contra de la sentencia de dieciocho de julio de dos mil diecinueve, (erróneamente datada como del año dos mil dieciséis), dictada por la Corte de Apelaciones de Valdivia, la que, por consiguiente, no es nula.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Brito.

Rol N° 24.138-2019

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Arturo Prado P., el Ministro Suplente Sr. Juan Muñoz P., y los Abogados Integrantes Sra. Leonor Etcheberry C., y Sr. Antonio Barra R. No firma el Ministro Suplente Sr. Muñoz P., y el Abogado Integrante Sr. Barra, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por haber concluido su período de suplencia el primero y por estar ausente el segundo.





En Santiago, a dieciocho de agosto de dos mil veinte, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

